
*JULIO CARRANZA VALDÉS (1958). Lic. en Economía Política. Investigador
del Departamento de América Latina en el CEA.*

**Premisas de la política
centroamericana
de los Estados Unidos**

La política centroamericana de los Estados Unidos ha estado regida por premisas que cierran el espacio al logro de una solución negociada al conflicto

La resolución de sostener su hegemonía en Centroamérica y El Caribe no es en modo alguno un principio nuevo de la política exterior de los Estados Unidos. Una larga cuenta de intervenciones militares demuestra la persistencia histórica en los diferentes gobiernos norteamericanos por mantener un control no compartido sobre esta área, con una recurrencia sistemática a la utilización de un expediente de fuerza.

A los efectos de cualquier análisis, resulta útil identificar los intereses que para la lógica del imperialismo norteamericano contiene la llamada Cuenca del Caribe, de la cual Centroamérica es una parte importante.

Estos se pudieran resumir, como mínimo, en los siguientes aspectos:

I. Intereses geopolíticos y militares

Posee el Canal de Panamá, principal vía de comunicación entre el Atlántico y el Pacífico, así como otras opciones al efecto.

Lugar por donde pasa una importante parte del comercio que viene y va de los Estados Unidos, incluyendo materias primas indispensables para la industria norteamericana (petróleo y otras).

Contiene una reserva considerable de materias primas estratégicas y energéticas (petróleo, níquel y bauxita).

Por la cercanía geográfica, se considera un bastión importante en la seguridad de la frontera Sur-Este de los Estados Unidos.

Contiene numerosas instalaciones militares norteamericanas que pudieran incluso ser ampliadas.

Es un nudo importante para los controles y comunicaciones civiles y militares.

Es el entorno inmediato de Cuba.

Es colindante con tres grandes países del continente: México, Colombia y Venezuela.

II. *Intereses económicos Existen intereses comerciales.*

La zona es una importante abastecedora de ciertos alimentos agropecuarios.

Existen, aunque en una escala inferior a otros lugares de América Latina, inversiones norteamericanas.

Hay importantes centros financieros internacionales ubicados en la región: Panamá y Bahamas.

III. *Intereses políticos Mantener estabilidad política en la región.*

Sostener una favorable clientela político-social.

Una consideración del conjunto de intereses identificados en la zona por Estados Unidos, nos hace coincidir con Xabier Gorostiaga cuando apunta: “Los intereses más vitales de los Estados Unidos en Centroamérica y El Caribe son, sin duda alguna, de carácter geopolítico”¹.

Sin embargo, no es simplemente la existencia de estos llamados intereses vitales lo que explica que durante más de seis años Centroamérica se ha mantenido como una prioridad en la política exterior norteamericana.

En estos países el imperialismo pactó una alianza estratégica con los sectores más reaccionarios, oligárquicos-agroexportadores², quienes durante décadas le garantizaron la protección de sus intereses en la región y la estabilidad de su sistema de dominación.

Mientras tanto, en Centroamérica se fijaba una sociedad de capitalismo dependiente y atrasado cuyo modelo de acumulación condicionó una muy polarizada distribución del ingreso, que no permitió siquiera que el crecimiento económico alcanzado por estas sociedades durante la década de los 60 y primera mitad de los 70 produjera una elevación de los ingresos y el nivel de vida de los sectores populares. Paradójicamente, el carácter

¹ Xabier Gorostiaga: "Geopolítica de la crisis regional". En *Cuadernos de pensamiento propio*. INIES-CRIES. Managua, enero de 1984.

² Nos identificamos con Edelberto Torres Rivas, quien al utilizar este término explica: “la oligarquía como atracción de clase fue la modalidad burguesa atrasada que personifica el predominio incompleto del capital en la producción agraria y en la comercialización hacia afuera, producción basada en la gran propiedad terrateniente, en el régimen parcelario-campesino y sus variantes, apoyado en la sumisión formal del trabajo, en el control monopólico de una élite (en buena medida, propietarios extranjeros o recién llegados) sobre los procesos del beneficiado y el comercio exterior”. Cfr. Edelberto Torres Rivas: “¿Quién destapó la caja de Pandora?” En *Polémica*, no. 13, San José de Costa Rica, enero-febrero de 1984.

concentrador del modelo hacía que aún en los años de crecimiento estos indicadores decrecieran; obviamente, en los años de crisis tal efecto se acentúa³.

Con la sola excepción de Costa Rica, históricamente el Estado adoptó formas dictatoriales en aras de garantizar a las fracciones dominantes de la burguesía, a través de la coerción el funcionamiento de la economía en condiciones ventajosas, por lo que se ha reprimido toda demanda reivindicativa de los trabajadores y se cerró el espacio político a los sectores reformistas.

El apoyo militar norteamericano a la acción contrarrevolucionaria en Guatemala en 1954 es una prueba histórica de la resistencia del imperialismo a cambiar sus alianzas políticas en la región y, por tanto, a favorecer cualquier proceso reformista o modernizante en el área.

Todo esto explica el alto nivel de tensiones y violencia social que han caracterizado a las sociedades centroamericanas. Sobre todo en Nicaragua y El Salvador llegaron a conformarse movimientos políticos de contenido claramente popular y antiimperialista, como el de Sandino y el de Farabundo Martí. Sin embargo, en los diferentes momentos, con el apoyo irrestricto del imperialismo norteamericano, la oligarquía local logró neutralizar la situación.

Con el paso de los años, sobre la base objetiva de las contradicciones del modelo de explotación y de la acumulación de las tensiones sociales, en tres de los países de la región se fue gestando un movimiento revolucionario de legítimas raíces nacionales —el FSLN en Nicaragua, el FMLN en El Salvador y la URNG en Guatemala— portador de un proyecto político que en su primera fase pretende establecer, ahora bajo la conducción popular, las condiciones que el capitalismo dependiente y las clases dominantes fueron incapaces de producir en Centroamérica, es decir, lograr la independencia nacional, construir la democracia y crear condiciones para implementar una estrategia de desarrollo económico viable. Los principios básicos de ese modelo serían una economía mixta, el sostenimiento del pluralismo político y una política exterior de no alineamiento.

En estas condiciones, el proyecto revolucionario permite una amplia convocatoria política que, bajo la hegemonía de las capas populares, ofrece un espacio e incorpora a los sectores más nacionalistas de la burguesía local y a los estratos medios, clásicamente marginados de la vida política de sus respectivos países⁴.

El establecimiento de un proyecto de semejante naturaleza no constituye de ninguna manera un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, aunque sí fractura la relación de

³ Véase Julio Carranza Valdés: "Economía y crisis política en Centroamérica", En *Cuadernos de Nuestra América*: vol. I. no. 1. La Habana, enero-julio de 1984,

⁴ Para una mayor ampliación sobre el particular, véase Carlos María Vilas: *Perfiles de la Revolución Sandinista*, Ed. Casa de las Américas, La Habana, 1985.

dependencia a la que está sujeta la región y liquida a la fracción tradicionalmente aliada al imperialismo, con lo cual queda desarticulado su sistema de dominación en el área.

Para los primeros meses de 1979 el gobierno de los Estados Unidos, presidido entonces por James Carter, descubre que la dictadura de Anastasio Somoza es incapaz de contener la ofensiva militar del Frente Sandinista de liberación Nacional (FSLN). A pesar de todo el esfuerzo por lograr una salida no revolucionaria a la inminente caída de la dictadura, el gobierno norteamericano no pudo impedir el acceso al poder de la organización revolucionaria, con lo que comienza a implementarse el proyecto popular en uno de los países de la región.

Para entonces en Centroamérica se ha conformado ya una compleja situación donde se da una presencia simultánea de una crisis económica y social, agravada por la crisis económica internacional, con una profunda crisis política en la que aparecen como factor más dinámico las organizaciones revolucionarias, ahora con opciones reales de poder. Tras la victoria sandinista se sucede un incremento del potencial revolucionario en el Salvador y Guatemala, con lo que el sistema de dominación oligárquico-imperialista queda seriamente amenazado.

Así, la coincidencia de esta circunstancia política en un área que contiene importantes intereses geopolíticos, es la primera razón histórica que provoca en 1979 el ascenso de la cuestión centroamericana como tema priorizado en la política exterior de los Estados Unidos.

Para reparar esta amenaza, Carter modifica su política centroamericana y favorece como elemento esencial el fortalecimiento del dispositivo militar en el área, a fin de estar en condiciones de resolver por la fuerza la crisis que sus maniobras políticas tardías no eran capaces de paliar. Con esto se hizo más profunda la falta de coherencia entre el discurso que había arrastrado desde su toma de posesión, uno de cuyos planteos centrales era el respeto a los derechos humanos y la práctica de fuerza que la situación centroamericana le obligaba a implementar. Para entonces ya Carter había tenido que afrontar fuertes críticas de sus opositores, que le inculpaban su incapacidad para defender los intereses internacionales de los Estados Unidos expresados en sucesos como los de Etiopía, la crisis de los rehenes en Irán y el propio triunfo sandinista en Nicaragua, lo que, sumado a la crisis que afrontaba la economía norteamericana, produjo el deterioro de su influencia política y el cierre definitivo de sus posibilidades de reelección, a pesar de sus esfuerzos de, últim3 hora por recuperar su credibilidad en el electorado.

Con Ronald Reagn se instala en la Casa Blanca un nuevo proyecto político, con el objetivo central, expresado abiertamente en documentos como el de Santa Fe o el del *National Security Council* o directamente en los discursos del Presidente, de recuperar la hegemonía norteamericana a nivel internacional, cuyo proceso de deterioro evidente había comenzado con la derrota en Vietnam.

La inconsecuencia de Carter entre la política que realizaba y su retórica quedó superada por Reagan. Respecto al problema centroamericano, el nuevo Presidente estaba en condiciones de desatar sin trabas y con un nivel superior de agresividad la política de fuerza que su predecesor comenzó a construir en sus últimos meses de gobierno.

Para la nueva administración republicana, Centroamérica añade al conjunto de intereses geopolíticos una dimensión nueva. La búsqueda de la restitución de la hegemonía mundial por los Estados Unidos, obligaba a probar la capacidad de sostenerla en un área limítrofe con sus fronteras nacionales. En diversas ocasiones el propio Presidente ha explicado esta disyuntiva en los siguientes términos: "Si no logramos defendemos allí" no podemos esperar vencer en otra parte, nuestra credibilidad se derrumbaría, así como nuestras alianzas y la seguridad de nuestra patria estarían en peligro".

En el mismo sentido, Robert Tucker afirmaba en 1983: "No es la seguridad de las vías marítimas, ni la perspectiva de una inundación de refugiados a este país, o el peligro para la estabilidad de México. Lo que está en juego en definitiva en América Central es la credibilidad del poder de los Estados Unidos⁵.

Finalmente, el Informe de la Comisión Kissinger, al listar los intereses de seguridad implicados en Centroamérica, destaca en el último punto el impacto negativo que sobre la posibilidad de Estados Unidos de influir sobre eventos globales tendría la pérdida de hegemonía en la América Central:

En términos globales los intereses directos de seguridad nacional de Estados Unidos tiene grandes intereses en el presente conflicto en América Central. Ellos incluyen prevenir: a) una serie de desarrollos que podrían obligarnos a dedicar grandes recursos a defender zonas próximas al Sur de Estados Unidos, reduciendo así nuestra capacidad de defender nuestros intereses en otras partes; b) UN amenaza potencialmente seria a nuestras vías marítimas a través del Caribe.

La proliferación de Estados marxista-leninistas que aumentarían la violencia, la dislocación y la represión política en la región.

La erosión de nuestro poder para influir sobre eventos globales que fluirían de la percepción de que fuimos incapaces de influir en eventos vitales cerca de nuestra casa⁶.

De manera que el carácter esencialmente geopolítico de los intereses norteamericanos en Centroamérica se ve reforzado por el valor particular que esta área contiene a los efectos de los objetivos estratégicos de la política exterior de la actual administración. El desafío del

⁵ Robert Tucker: "Their Wars, Our Choice". En *The New Republic Special Issue on Central America*, Washington. 1983.

⁶ Informe de la Comisión Kissinger.

movimiento popular centroamericano origina así un síndrome de credibilidad y legitimación que daña al proyecto de hegemonía global del presidente Reagan⁷.

Hay que partir de aquí para entender toda la lógica de la política centroamericana del gobierno de los Estados Unidos, desde el diseño ideológico hasta la acción diplomática y militar.

PREMISAS DE LA POLITICA NORTEAMERICANA HACIA CENTROAMÉRICA

La política norteamericana hacia la región está regida por dos premisas fundamentales:

a) No aceptar ninguna forma de poder popular

Los Estados Unidos se plantean, en primer lugar, aplicar una política combinada de contención en El Salvador y de *roll back* en Nicaragua; o sea, derrotar al movimiento revolucionario salvadoreño, lo que excluye incluso cualquier fórmula de poder compartido, y respecto a Nicaragua, aniquilar la Revolución Sandinista. Se trata de derrotar al gobierno y a las fuerzas revolucionarias del área mediante su desgaste, des legitimación, aislamiento y enfrentamiento militar, a fin de que dejen de ser una alternativa política ante sus pueblos.

La actitud demagógica que el gobierno democristiano de El Salvador ha mantenido respecto al diálogo con la guerrilla, demuestra que su padrino político, el gobierno de los Estados Unidos, no está interesado en hallar ninguna alternativa viable de negociación con el movimiento revolucionario.

Respecto a Nicaragua, los Estados Unidos han sido el principal enemigo del modelo pluralista; con presiones de todo tipo han buscado llevar al gobierno hacia una ruptura por la izquierda para aislar internacionalmente a la revolución y convertirla en un mal ejemplo para el resto de las fuerzas democráticas que apoyan al movimiento revolucionario en otros países de la región.

En esta circunstancia, todo paso constructivo del gobierno sandinista dirigido a encontrar una fórmula de coexistencia pacífica sobre la base del respeto mutuo y la autodeterminación, ha sido deliberadamente rechazado y acusado por el gobierno norteamericano.

Del contenido de las exigencias que se hacen a Managua respecto al abandono de su solidaridad moral con el movimiento revolucionario salvadoreño, la modificación del carácter de sus relaciones exteriores y la pretensión de que se establezca un diálogo con las fuerzas contrarrevolucionarias armadas y dirigidas por la CIA, se deduce claramente que la única salida admitida por el imperialismo es la capitulación del gobierno revolucionario.

⁷ Véase Xabier Gorostiaga: "Centroamérica: respuesta al proyecto imperial". En *Pensamiento propio*. Managua, septiembre de 1984.

Por su carácter revelador, consideramos útil insertar íntegramente el contenido de la Orden Ejecutiva y Mensaje al Congreso del Presidente el pasado 2 de marzo de 1985 a propósito de la decisión de bloquear económicamente a Nicaragua:

He autorizado estas medidas en respuesta a la situación de emergencia generada por las actividades agresivas del gobierno de Nicaragua. Los continuados esfuerzos de Nicaragua para subvertir a sus vecinos, su veloz y desestabilizador programa militar, sus estrechos lazos militares y de seguridad con Cuba y la URSS y la imposición de un gobierno interno totalitario comunista han sido ampliamente descritos durante varios de los meses pasados. La actual visita del presidente Daniel Ortega a Moscú subraya esta perturbadora orientación. El reciente rechazo de Nicaragua a mi iniciativa de paz, vista a la luz de la constantemente creciente presión que el militarismo de Nicaragua impone sobre las naciones democráticas de la región, hace clara la urgente amenaza que las actividades de Nicaragua representan para la seguridad de la región y, por lo tanto, para la seguridad y la política exterior de los Estados Unidos. Las actividades en Nicaragua, apoyadas por la URSS y sus aliados, son incompatibles con relaciones comerciales normales.

Al adoptar estas medidas quiero señalar que durante el debate del presente mes sobre la política de los Estados Unidos hacia Nicaragua, muchos miembros del Congreso, tanto los que apoyan como los que adversaban mis propuestas, propugnaron la pronta aplicación de sanciones económicas.

He declarado con franqueza muchas veces que para que la paz se logre en Centroamérica es necesario que se produzcan cambios en la conducta sandinista. Ahora de nuevo hago un llamado a Nicaragua.

Para que cese de exportar las insurrecciones armadas, el terrorismo y la subversión a los países vecinos.

Para que ponga fin a su amplia vinculación militar con Cuba y el bloque soviético y

Para que cese su masivo armamentismo y ayude a restaurar el equilibrio militar en la región, y para que respete legalmente y en la práctica el pluralismo democrático y la observancia completa de los derechos políticos y humanos en Nicaragua.

La aplicación por los Estados Unidos de estas sanciones deben ser completadas por el gobierno de Nicaragua y por aquellos que lo instigan, como inequívoca evidencia de que adoptamos seriamente la obligación de proteger nuestros intereses de seguridad y los de nuestros amigos. Pido al gobierno de Nicaragua que contemple seriamente las preocupaciones de sus vecinos y su propia oposición y a honrar sus solemnes compromisos de no interferencias, no alineamiento, respeto por la democracia y la paz.

La ausencia de este cumplimiento sólo disminuiría las perspectivas de un arreglo pacífico en América Central⁸.

Más allá de cualquier discusión acerca de la ideología de la dirección del Frente Sandinista, un análisis práctico de *real politik* hace evidente que la confrontación con sus vecinos, la ruptura con Occidente o la violación del pluralismo interno afectarían la seguridad misma de la Revolución Nicaragüense. Cualquier movimiento en esa dirección ha sido la respuesta definitiva e inevitable a las gigantescas agresiones provenientes del mismo que acusa por tal movimiento.

Los señalamientos críticos de Ronald Reagan pierden sentido cuando se les valora a la luz de los intereses geopolíticos y de los proyectos hegemónicos que de manera manifiesta el propio Presidente repite con frecuencia.

Se presentan mucho más claros los objetivos norteamericanos cuando revisamos una declaración del propio Reagan a *The New York Times*, veintidós meses antes de emitirse la Orden Ejecutiva a propósito del bloqueo:

"Sería extremadamente difícil lograr la estabilidad en Centroamérica mientras permanezca en el poder el actual gobierno nicaragüense"⁹.

De manera que la premisa de no aceptar ninguna forma de poder popular impide de hecho el reconocimiento a cualquier forma de coexistencia pacífica' con el movimiento revolucionario que permita legitimar el diálogo.

b) No negociar

Del principio de no aceptar ninguna forma de poder popular ni en Nicaragua, ni compartido en El Salvador, se deriva la segunda premisa de no negociar. El apoyo verbal norteamericano a la gestión negociadora del Grupo de Contadora desempeña un papel diversionista en un paquete de política cuyo componente esencial es el apoyo a las fuerzas contrarrevolucionarias y la permanente presencia militar de ese país en la región.

Al poco tiempo de constituirse el Grupo de Contadora, con el objetivo fundamental de impedir una intervención militar en la región, el gobierno norteamericano percibe que entre la intervención directa y la negociación quedaba aún un amplio espacio para producir políticas de presión y desgaste y continuar el enfrentamiento militar al movimiento revolucionario utilizando las fuerzas contrarrevolucionarias locales. A la par de incrementar la hostilidad, esta política le ha permitido desarrollar una retórica de apoyo a Contadora que, de hecho, se ha convertido en el impedimento esencial para que el Grupo no haya podido obtener hasta el momento un proceso de negociación efectivo.

⁸ Ronald Reagan: "Executive Order and Message to Congress". En *The New York Times*, 2 de mayo de 1985.

⁹ *The New York Times*, 22 de Julio de 1983.

Con la propuesta del Acta Revisada (septiembre de 1984), Contadora logra entregar una fórmula que exigía concesiones mutuas y que podía conducir a una solución pacífica del conflicto. En ese momento se revelaron claramente las posiciones ante la negociación de las diferentes partes: Nicaragua accedió de inmediato a la firma del documento, mientras los Estados Unidos presionaron al resto de los países centroamericanos para que evitaran y rechazaran la fórmula.

Desde entonces el gobierno norteamericano presiona sobre Honduras, Costa Rica y El Salvador para que estos impongan a Contadora propuestas que impliquen mayores exigencias a Nicaragua afines con los intereses de los Estados Unidos, con lo que se corre el riesgo de que las demandas sean tales que pongan en peligro la subsistencia misma de la Revolución y, por lo tanto, pierda definitivamente sentido la búsqueda de una solución negociada.

En este sentido, resultan reveladoras las declaraciones del Canciller de El Salvador en una conferencia de prensa ofrecida conjuntamente con los cancilleres de Honduras y Costa Rica en San José el 13 de febrero de 1985, al expresar que cuando se renueven las conversaciones del Grupo de Contadora será sobre la base del documento y de las posiciones de paz generadas por los propios centroamericanos, no impuestas por las diplomacias ajenas y externas a la región"¹⁰.

Por otra parte, la conocida historia de las conversaciones bilaterales en Manzanillo prueba que para los Estados Unidos fue una maniobra electoral y de búsqueda de influencias en la opinión pública mundial, con la que además se pretendía identificar las posibles concesiones que se podrían obtener de Nicaragua en medio de una política de presión.

LA MANIPULACIÓN IDEOLÓGICA

Estas premisas condicionan una política de fuerza en Centroamérica que va desde las presiones económicas, políticas, diplomáticas y militares contra Nicaragua y el sostenimiento económico y militar del gobierno de El Salvador, hasta una posible intervención directa. Para producir esta política con el menor costo posible, la administración Reagan ha buscado crear consenso interno y externo a través de una retórica donde la acción contra las fuerzas populares se justifica como un enfrentamiento al "intervencionismo" de Cuba y la URSS en la región.

Así, se ha construido una interpretación conservadora acerca de la crisis que podría resumirse como sigue:

¹⁰ Los cancilleres ofrecieron la conferencia de prensa al comunicar su negativa de participar en la reunión preparada por Contadora para el día 14 de febrero de 1985. La justificación fue el incidente entre Nicaragua y Costa Rica por el caso de Urbino Lara.

- Si bien la actual crisis en la América Central es producto de las dificultades producidas por la actual crisis económica internacional y su impacto sobre sociedades con un alto nivel de atraso y dependencia económica, su aprovechamiento por las fuerzas revolucionarias obedece a la promoción e intervención de Cuba y la URSS en la región.
- La naturaleza e inspiración del movimiento revolucionario regional es esencialmente comunista, antinorteamericana y dictatorial, y se encuentra además estratégicamente vinculada a los intereses hegemónicos de la URSS.
- Los movimientos revolucionarios de la región están vinculados a una red terrorista internacional.
- El actual conflicto centroamericano representa una amenaza global para Occidente y atenta contra los intereses de seguridad de los Estados Unidos. Representa igualmente una amenaza para todos los países de la llamada Cuenca del Caribe. Los Estados Unidos no pueden permitir que ninguna de las naciones de la "Cuenca" esté bajo la influencia de otra superpotencia¹¹.

Se trata de una siniestra manipulación ideológica que pretende explicar una crisis de raíces locales y dimensión regional en términos de contradicción estratégica Este-Oeste, con peligros implicados no sólo para la seguridad nacional de los Estados Unidos, sino también para el resto de las naciones occidentales.

OBJETIVOS Y TAREAS CENTRALES DE LA POLÍTICA NORTEAMERICANA

A partir de estas premisas, y en el marco de un discurso político en el que se advierte el peligro que sufre la seguridad nacional norteamericana ante la presencia de un poder externo en Centroamérica, se definen un conjunto de objetivos y tareas en los que toma cuerpo la política norteamericana hacia la región.

El primer objetivo es *prepararse para un conflicto regional* cuya tarea principal es precisamente *fortalecer el dispositivo militar propio en la zona*. En efecto, la capacidad de resistencia que han demostrado la Revolución Sandinista y el movimiento revolucionario salvadoreño a las diferentes medidas que se han implementado para lograr su derrota, ha hecho que el componente militar de la política de los Estados Unidos hacia la región tenga un peso cada vez más importante.

Debido a estas circunstancias, el gobierno norteamericano ha ido creando las condiciones necesarias para poder producir una solución militar con el menor costo político posible si esta se hace necesaria. En la acción de los Estados Unidos se puede identificar la aplicación

¹¹ Véase Juan Valdés Paz: "Cuba y la crisis centroamericana". En *Cuadernos de Nuestra América*, vol. 1, no. 2, la Habana, junio-diciembre de 1984.

gradual de los primeros escalones de la estrategia militar norteamericana de la reacción flexible.

El nivel y el carácter de las inversiones militares en Honduras, así como las permanentes maniobras desarrolladas en la zona, prueban que el gobierno se prepara para sostener una prolongada presencia militar en el área. La ayuda militar a Honduras se incrementó de 4 millones de dólares en 1980 a 78,5 millones en 1984; para 1985 la administración había pedido 137 millones de dólares.

Las fuerzas norteamericanas han modernizado sus destacamentos de combate dislocados en las numerosas bases militares que poseen en la región. Las llamadas "Fuerzas de Operaciones Especiales" están diseñadas para dar un golpe rápido y contundente sobre el blanco escogido y cumplir los objetivos políticos que se decidan con un bajo costo¹².

Se trata de todo un complejo plan que, conjuntamente con el componente militar, incorpora medidas de carácter económico y político, conocido en el argot militar como "guerra de baja intensidad" (*low intensity war*). En documentos de instituciones norteamericanas cercanas a la administración Reagan, como la *Heritage Foundation*, se habla abiertamente de las ventajas de este plan¹³. El gobierno norteamericano se prepara para tener en su fuerza militar la garantía de la protección de sus intereses en el área, quebrando la soberanía de estas naciones. La brutal intervención en Granada en octubre de 1983 así lo prueba.

Una segunda tarea de este objetivo inicial consiste en *fortalecer las fuerzas contrarrevolucionarias locales*: lograr resolver la crisis sin la necesidad de proceder a una intervención directa disminuye los costos políticos al imperialismo. Por esta razón, se han robustecido militarmente las fuerzas contrarrevolucionarias locales. Al ejército salvadoreño se le ha dotado de modernas unidades de combate entrenadas por los Estados Unidos, y su pertrechamiento militar es constantemente renovado e incrementado. Han coordinado, equipado y entrenado a las bandas contrarrevolucionarias nicaragüenses, que se han convertido en la fuerza de choque central de la guerra sucia que desarrolla el gobierno norteamericano contra Nicaragua.

Para finales de 1985 la contrarrevolución ha agotado sus posibilidades de reclutamiento, lo que impide que el número de los efectivos crezca más allá de una cantidad que oscila entre 8000 Y 10000 hombres con los que cuenta, según los cálculos más rigurosos. Esta situación contrasta con el importante crecimiento del Ejército Popular Sandinista (EPS), que de hecho pone a la contrarrevolución en una situación militarmente difícil; ello le plantea un problema urgente a los Estados Unidos, debido al relevante papel que desempeña la contrarrevolución en la política norteamericana. Por esta razón, la administración trata de lograr el equilibrio militar mediante el fortalecimiento de la calidad técnica del armamento de las bandas, que

¹² Véase Lilia Bermúdez y Raúl Benítez: "La segunda administración Reagan en América Central: guerra popular y la reactivación de las Fuerzas de Operaciones Especiales", ponencia al Congreso de Sociología de Panamá, marzo de 1985.

¹³ Heritage Foundation: *Mandate far Leadership II*, 1984.

internamente han venido siendo dotadas con cohetes antiaéreos "Sam 7", buques portapirañas y pequeños aviones artillados. Las presiones del Ejecutivo sobre el Congreso para que este legalice la ayuda a la contrarrevolución se han incrementado, precisamente, en el momento en que se considera necesario fortalecerla en lo militar con armamento técnicamente superior.

Una tercera tarea de este objetivo es alinear a todos los países del área contra Nicaragua. Ya hemos referido cómo a nivel de Contadora los Estados Unidos han presionado por formar un frente centroamericano contra Nicaragua; sin embargo, es a nivel militar donde esta política recibe el mayor empuje norteamericano y se hace cada vez más peligrosa.

En Honduras se han creado todas las condiciones militares necesarias para utilizar ese país como una gran base de agresiones contra Nicaragua y, eventualmente, para apoyar las operaciones militares del ejército salvadoreño.

Costa Rica es sistemáticamente presionada para que afecte su posición de neutralidad y condene abiertamente a Nicaragua. La provocación de conflictos fronterizos es cada vez más frecuente y ha contribuido, como ningún otro medio, a incrementar las tensiones en el área.

Costa Rica contiene un interés especial en el diseño de la política norteamericana. A diferencia de Honduras, este país goza internacionalmente del prestigio que le han dado décadas de ejercicio democrático, además de tener reconocido el carácter de país desarmado. Es relativamente más fácil trasladar a la opinión pública mundial la falacia de una Nicaragua agresora y una Costa Rica agredida, lo que persigue el aislamiento de la Revolución Sandinista y podría constituir además un pretexto político para desatar una intervención norteamericana directa.

Como segundo objetivo se puede identificar *aislar el conflicto centroamericano del contexto latinoamericano e internacional*. A diferencia de lo ocurrido tras el triunfo de la Revolución Cubana, el gobierno norteamericano no pudo manipular al sistema interamericano para aislar a Nicaragua y refrendar su política de fuerza en la región. En el contexto latinoamericano se creó un clima de opinión favorable a la remoción de las dictaduras centroamericanas y a los movimientos de cambio.

Los Estados Unidos desarrollaron entonces una política tendiente a comprometer en un apoyo directo a los gobiernos más reaccionarios de la región –las dictaduras de Argentina y Chile estuvieron listas para dar instrucción y apoyo con hombres a las fuerzas contrarrevolucionarias del área. Además, buscaron apoyo político en gobiernos como el entonces democristiano de Venezuela.

La guerra de las Malvinas, los cambios políticos en el continente y el surgimiento del Grupo de Contadora, fracturaron en gran medida estos compromisos y obligaron al gobierno norteamericano a implantar nuevas vías para impedir el apoyo latinoamericano al gobierno de Nicaragua y al FMLN en El Salvador.

La figura de Contadora aparece como un foro regional al margen de la OEA para lograr la paz en el área y gana rápidamente el apoyo de la mayor parte de los gobiernos y las fuerzas políticas de América Latina. Los Estados Unidos pasan de una primera actitud de rechazo a una segunda actitud de apoyo al Grupo, que en la práctica ha buscado limitar y desarticular su acción. El gobierno norteamericano ha cuidado no derivar de su reconocimiento compromisos con los acuerdos del Grupo. Tal como hemos referido, se ha presionado a Honduras, Costa Rica y El Salvador para que enfrenten políticamente al gobierno de Nicaragua y se han desgastado fortísimas presiones sobre países miembros del Grupo para que modifiquen sus actitudes, como a las que ha estado sometido México en su frontera Norte.

Paralelamente, los Estados Unidos han pretendido que del apoyo de los gobiernos latinoamericanos a Contadora se derive un distanciamiento respecto a su apoyo directo al gobierno de Nicaragua. No obstante, la concertación orgánica de un mayor apoyo a Contadora refuerza el objetivo de impedir una intervención militar de Estados Unidos en la región.

Tarea de este segundo objetivo es neutralizar la participación de otras fuerzas políticas en el conflicto. El diseño geopolítico de los intereses norteamericanos en la llamada Cuenca del Caribe no sólo es contrario a la llamada influencia de países del bloque socialista en el área, sino también a la de otras potencias occidentales. Ni siquiera los países europeos con presencia colonial en el área han disputado históricamente la hegemonía norteamericana.

Sin embargo, a partir del fortalecimiento del movimiento revolucionario regional y del triunfo de la Revolución Sandinista, los partidos socialdemócratas de Europa Occidental (algunos de ellos en el gobierno), ofrecieron un notable apoyo a estas fuerzas. Este hecho coincide con una apertura de la Internacional Socialista (IS), que a partir de 1976 se plantea incrementar su influencia en el llamado Tercer Mundo; ya en América Latina se habían incorporado varios partidos políticos al movimiento socialdemócrata internacional.

Para la percepción de la socialdemocracia europea, la situación centroamericana brindaba, por un lado, la posibilidad de lograr espacio político en un área de donde había estado históricamente excluida por los Estados Unidos. Probablemente este acercamiento a las fuerzas progresistas de América Central le abriría el camino para una relación nueva con el resto del continente. Por otro, la socialdemocracia, con una visión política más aguda que la del gobierno norteamericano, percibe la necesidad de cambios en Centroamérica que deben ser convenientemente apoyados para que se mantengan dentro de los límites de pluralismo que el movimiento revolucionario plantea y evitar así una radicalización definitiva de estos procesos y, con ello, su cambio de campo.

Sin embargo, desde Washington se ha percibido la participación europea como un desafío a sus intereses en el área, que provoca dos efectos contrarios a la política exterior del gobierno

norteamericano: en primer lugar, la presencia de un poder más mediano en el conflicto, y en segundo lugar, lo que esto constituye como factor de legitimación del movimiento revolucionario a nivel internacional.

Consecuentemente, el gobierno norteamericano ha procedido a tratar de rebajar la presencia y la influencia de la socialdemocracia europea en el área, con una combinación de presiones directas sobre los países europeos y presiones sobre el movimiento revolucionario, en particular sobre Nicaragua, para que altere su modelo político y se dificulten sus relaciones con la socialdemocracia internacional.

La pretensión final de la política norteamericana se expresa en un tercer objetivo de carácter más general: *reparar el sistema de dominación imperialista en la región*.

Las premisas, objetivos y tareas identificadas de la política norteamericana para Centroamérica constituyen un amplio plan contrainsurgente y contrarevolucionario que contiene medidas de carácter económico, social, político, ideológico, diplomático y militar, con el objetivo estratégico de derrotar al movimiento revolucionario regional y reparar el sistema de dominación de los Estados Unidos en esta región.

Este objetivo central ha planteado a los Estados Unidos la necesidad de *diseñar un nuevo proyecto político para la región*.

Paralelamente a la guerra contrarrevolucionaria que desarrolla, el imperialismo ha concebido y trata de construir un nuevo proyecto político para la región, con la pretensión de cerrar las posibilidades del movimiento revolucionario en el largo plazo. Sin embargo, este nuevo diseño no cambia esencialmente las cualidades del sistema de dominación establecido. Las alianzas políticas apenas se modifican; la ayuda económica planificada es escasa y se fortalecen los dispositivos de represión.

En el orden económico, la estrategia expuesta en la llamada Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC), refrendada por el *Informe de la Comisión Kissinger grosso modo* consiste en fortalecer al capital privado, crear mayores incentivos para fomentar la inversión norteamericana, —que a pesar de esto se resiste a fluir hacia la región—, combinada con cierto incremento de las relaciones comerciales con los Estados Unidos y escasos niveles de ayuda financiera. Las estructuras internas apenas son modificadas. Se trata de instrumentar más aún las economías del área en función de los intereses norteamericanos, con lo que se profundiza su dependencia. Es esencialmente una estrategia económica subordinada a las consideraciones de los grupos de poder norteamericano sobre la seguridad de los Estados Unidos en la región¹⁴.

¹⁴ Varios: *Notas críticas sobre el plan Reagan para la Cuenca del Caribe*. Avances de Investigación no. 19, CEA, 1981.

Una evaluación de conjunto del nuevo diseño político concebido por los Estados Unidos para los países del área nos permite identificar sus elementos fundamentales del siguiente modo:

- Lograr alianzas de centroderecha que consigan dominar la escena política.
- Instalar gobiernos civiles representativos.
- Reforzar el dispositivo militar local.
- Distanciar las Fuerzas Armadas de los gobiernos, aunque continúen siendo el principal factor de poder.
- Incrementar relativamente la ayuda económica.
- Favorecer ciertas reformas de limitado alcance.
- Incrementar la presencia militar de las Fuerzas Armadas norteamericanas en el área.

Con diferencias por países, esta ha sido la tendencia en El Salvador, Honduras y Guatemala.

Sin embargo, es importante retener que todo esto ocurre en un marco no exento de ciertas contradicciones entre los Estados Unidos y sus aliados locales, que en algunos momentos alcanzan expresiones importantes y que deben ser adecuadamente evaluadas a la luz de los problemas concretos de cada país en particular.

Finalmente, se pueden identificar un conjunto de factores que actúan como obstáculos de la política norteamericana.

El primer y más importante problema que enfrenta la política norteamericana en el área es la imposibilidad de derrotar al movimiento popular en el plano militar y en el plano político. Después de haber lanzado una ofensiva contrarrevolucionaria con cuantiosos recursos contra el FMLN, y luego de haber desarrollado todas las mañas de la guerra sucia contra Nicaragua, tanto el FMLN como el FSLN sostienen una probada capacidad combativa, un amplio apoyo de masas y reconocimiento internacional.

El ejército guatemalteco tampoco ha podido derrotar a las fuerzas de la URNG.

En estas condiciones, un involucramiento militar directo de los Estados Unidos le obligaría a enfrentar una guerra difícil en un territorio extraño, y ante un movimiento popular revolucionario que impondría un alto costo político a la intervención.

En segundo lugar, la crisis económica de carácter estructural que sufre la región no puede ser mejorada si no se favorecen cambios estructurales y se otorga suficiente ayuda financiera. Ninguno de estos principios está contenido en la política norteamericana: en estas

condiciones, la polarización de la sociedad se acentúa y la violencia se perpetúa como un rasgo estructural.

En tercer lugar, la coincidencia de una situación económica particularmente crítica en toda América Latina, cuyos rasgos fundamentales son el alto nivel de endeudamiento externo; la resistencia del capital financiero internacional a resolver favorablemente esta situación y el ascenso al gobierno de las fuerzas democráticas en el Cono Sur, son condiciones objetivas que pueden conformar un amplio frente latinoamericano que se oponga a la política de los Estados Unidos en Centroamérica.

En cuarto lugar, a pesar de que Reagan logró un apoyo bipartidista a partir de la entrega del Informe de la Comisión Kissinger -más notable hacia El Salvador que hacia Nicaragua-, y de que ha ido ganando espacio progresivamente en el Congreso, sobre todo a partir de su reelección, la opinión pública norteamericana continúa siendo contraria a una intervención militar norteamericana en el área, lo que expresa en definitiva la falta de consenso político de los diferentes grupos dirigentes del país.

De cualquier forma, para la administración Reagan no sólo constituye un problema la construcción de consenso sino además el sostenimiento de este cuando la política implantada no es eficaz y el problema planteado se prolonga en el tiempo.

No obstante, este es siempre un factor de riesgo porque se pueden producir rápidos cambios de opinión provocados por movimientos en la coyuntura regional, y su tratamiento en los medios de difusión masiva, combinados con las presiones del Ejecutivo sobre el Congreso.

En quinto lugar, el contexto internacional sigue siendo hostil a la política de los Estados Unidos. A pesar de ciertas modificaciones y de diferencias por partidos, la socialdemocracia europea es contraria a la política norteamericana. Más fuerte aún es la condena en el Movimiento de Países No Alineados. Por otra parte, los Estados Unidos han sido acusados ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya.

Por último, la no aceptación por Estados Unidos de un modelo democrático-popular en Centroamérica debido a la inflexibilidad de su política, podría producir una mayor polarización de las fuerzas políticas y sociales internas en Centroamérica y provocar una radicalización acelerada de los procesos populares que cierre todo espacio pluralista.

CONSIDERACIONES FINALES

Según se ha examinado, las premisas que rigen la política norteamericana hacia Centroamérica se han construido sobre una concepción esencialmente geopolítica. Este principio tiene una expresión en dos niveles que se refuerzan mutuamente. En primer término, en la región los Estados Unidos reconocen un conjunto de intereses estratégicos que han motivado la aspiración histórica de sostener un control no compartido en el área. En

segundo, el dominio sobre esta área se inscribe como un momento esencial en la lógica de un proyecto imperialista de hegemonía internacional, sostenido por la administración Reagan.

Tal como afirman frecuentemente diferentes representantes del *establishment*, para probar su capacidad efectiva de liderazgo a nivel mundial los Estados Unidos deben ser capaces de resolver el conflicto que se desarrolla en una zona reconocida como cuarta frontera. De manera más clara, para los grupos de poder que refrendan en los Estados Unidos el proyecto de hegemonía global, lo que está fundamentalmente en juego en la América Central es la credibilidad del poder norteamericano. Difícilmente exista algún observador medianamente inteligente que a estas alturas de la historia crea, como afirma Reagan, que lo que sucede en Centroamérica afecta la integridad nacional de Norteamérica.

Los Estados Unidos apoyaron un sistema de dominación regional que clausuró todas las vías posibles a las luchas populares; ahora explican el carácter armado de estas como un efecto de su enfrentamiento estratégico con la Unión Soviética.

No se trata solamente de la percepción equivocada y de la ignorancia histórica de un actor distanciado, sino, fundamentalmente, de una conciente manipulación ideológica para justificar una política de fuerza que pretende, tosudamente, detener la dinámica de transformaciones que las propias contradicciones de estas sociedades ha desatado. La paradoja está en que lo único que logra esta posición norteamericana es elevar los costos sociales y humanos ante cambios que son históricamente inevitables.

Incluso con la propia manipulación ideológica el imperialismo asume un riesgo. Cuando se explica todo el conflicto regional con la lógica de la seguridad nacional desaparece el sentido pragmático de la política y se corre el peligro de que al casarse con una variable de fuerza por la confianza en una solución de beneficio máximo, se pierda el tiempo apropiado para una salida negociada y el contendiente se corra aceleradamente de campo, cerrándoles toda posibilidad de relación e influencia, como ocurrió con Cuba en la década del 60.

En efecto, nada como la propia política de hostilidad de los Estados Unidos afecta tanto las posibilidades de desarrollo del proyecto pluralista en Nicaragua. Las constantes agresiones pueden apresurar un proceso de radicalización irreversible, que en situación de paz no sería considerado por los sandinistas como una necesidad inmediata debido a que las condiciones concretas de este país le ofrecen aún un importante margen al pluralismo político. Si los Estados Unidos no modifican su política, se cerraría objetivamente el espacio no sólo al pluralismo, sino incluso a la economía mixta, aunque la Revolución continuaría siendo viable bajo otras formas.

En un momento tan avanzado del desarrollo de la crisis, los viejos aliados de los Estados Unidos (oligarcas, altos jefes militares y líderes de los partidos tradicionales de derecha) han perdido toda capacidad de conducción sobre estas sociedades, con el grado de polarización social y político actual, tampoco aparecen los sectores de centro-derecha con suficiente fuerza para conducir con consenso el nuevo diseño político de los Estados Unidos para la región. Si no fueran suficientes otras, esta realidad debería hacer entender a los grupos de poder norteamericanos la necesidad de modificar su política respecto al área.

Si produjeran un cambio hacia una política más realista aprovechando la importancia económica que objetivamente posee para los países del área, los Estados Unidos podrían garantizar el sostenimiento de una relación influyente pero respetuosa. Se trataría de modificar su percepción geopolítica, reducir su presencia militar, reconocer la inevitabilidad de cambios estructurales en estos países conducidos por nuevos actores sociales a través de procesos democráticos y populares y de reordenar su relación económica con la región.

Por el contrario, si la cuestión geopolítica permanece rigiendo la conducta norteamericana sería imposible la soberanía y la autodeterminación en los países de la región, lo que cierra todo espacio posible a una solución negociada, situación que obviamente afectada a todos los actores, pero a mediano y largo plazo los propios Estados Unidos serían los más afectados.

Existe más de un escenario posible de negociación, donde la existencia de regímenes populares encabezados por organizaciones políticas que han expresado su disposición para un diálogo constructivo y viable no excluye el reconocimiento de los intereses norteamericanos.

Sin embargo, justamente en un momento en que enfrentan una crisis de tal magnitud, cuando el gobierno norteamericano debería y podría objetivamente asumir una política pragmática de mayor flexibilidad, se aferra a la doctrina de la seguridad nacional y se plantea recomponer un sistema de dominación que está definitivamente fracturado¹⁵.

El gobierno de los Estados Unidos ha aplicado progresivamente todo un expediente de fuerza que lo único que ha excluido hasta ahora es la intervención militar directa. Más allá de la discusión acerca de si es probable o no que en el plazo cercano se produzca una acción de esa naturaleza, está la evidencia objetiva de que todos los días se hace algo que acerca esa posibilidad. Esto convierte a Centroamérica en una región de inseguridad para todo el continente.

En la medida en que se refuercen los obstáculos antes identificados, los costos de la política norteamericana se elevarán y la harán menos viable.

¹⁵ Véase Rafael Hernández: "Estados Unidos-América Latina: la cuestión de la seguridad". En K. Middledenbrook, C. Rico: *US-LA Relations in the 80's*, Pittsburgh Press, 1985.

Por provenir de actores latinoamericanos, hay que destacar la importancia fundamental de dos de estos obstáculos. En primer lugar, el referido al incremento de la capacidad del movimiento revolucionario centroamericano para resistir el proyecto contrainsurgente de los Estados Unidos; en segundo lugar, el referido a la constitución de un frente latinoamericano que respalde la autodeterminación de los procesos sociales en la América Central, la no intervención y la solución negociada de los conflictos.

A la luz de la situación de crisis económica actual, los gobiernos democráticos de América Latina se replantean sus relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Decenas de intervenciones, años de relación y apoyo a los gobiernos dictatoriales, la actitud antilatinoamericana en el conflicto de las Malvinas, y actualmente la negativa de darle una solución viable al problema de la deuda externa y de favorecer un Nuevo Orden Económico con los países del hemisferio, han hecho que los nuevos líderes políticos del continente, así como una parte importante del resto de las fuerzas políticas, identifiquen con mayor claridad intereses propios que más allá de los grados y las diferentes ideologías que los sustentan, reconocen contradicciones importantes con el imperialismo norteamericano.

La coincidencia de estas condiciones favorece la posibilidad de concertación de la unidad continental que rechace la política de fuerza de los Estados Unidos y presione por lograr una salida negociable. En esa lucha por los pueblos de Centroamérica se estaría librando una lucha por la soberanía de todo el continente.